

# Conspiración y corrupción: una hipótesis probable

Por José Luís Fiori\* y William Nozaki\*\*

Página 12, 4 de agosto de 2019

•

Es común hablar de "teoría de la conspiración" cada vez que alguien revela o denuncia prácticas o articulaciones políticas "irregulares", ocultas al gran público en general y conocidas solo por los insiders o por las personas con más conocimientos. Y casi siempre, cuando se usa esta expresión es con el propósito de descalificar la denuncia que se ha hecho, o a la propia persona que hizo público lo que estaba destinado a ocultarse en la sombra o en el olvido de la historia. Pero, de hecho, más rigurosamente, no existe ninguna "teoría de la

Lo que existe son "teorías del poder", y la "conspiración" es solo una de las prácticas más comunes y necesarias de quienes participan en la lucha política diaria por el poder en sí. Esta distinción conceptual es muy importante para quien se proponga analizar la coyuntura política nacional o internacional, sin temor a ser acusado de "conspiracionista". Y éste es un punto de partida fundamental para la investigación que nos proponemos hacer sobre cuál fue el verdadero papel del gobierno de los Estados Unidos en el Golpe de Estado 2015/2016 y en la elección del Capitán Bolsonaro ", en 2018. En este caso, no hay manera de no seguir el camino de la llamada "conspiración", que culminó con la ruptura institucional y el cambio del gobierno brasileño. Y nuestra hipótesis preliminar es que la historia de esta conspiración comenzó en la primera década del siglo XXI, durante el "mandarinato" del vicepresidente estadounidense Dick Cheney, aunque ha tomado otra dirección y velocidad desde la presidencia de Donald Trump y la formulación de su nueva "estrategia de seguridad nacional", en diciembre de 2017.

Al principio fue una sorpresa, pero hoy todos ya entendieron que esta nueva estrategia ha abandonado los viejos parámetros ideológicos y morales de la política exterior de los Estados Unidos, de defensa de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico, y asumió explícitamente el proyecto de construcción de un imperio militar global, con la fragmentación y multiplicación de conflictos, y el uso de diversas formas de intervención externa, en los países que se convierten en objetivos norteamericanos. Ya sea a través de la manipulación inconsciente de los votantes y de la voluntad política de estas sociedades; ya sea a través de nuevas formas "constitucionales" de golpes de estado; ya sea mediante sanciones económicas cada vez más extensas y letales capaces de paralizar y destruir la economía nacional de los países afectados; ya sea, finalmente, a través de las llamadas "guerras híbridas" destinadas a destruir la voluntad política del adversario, utilizando la información más que la fuerza, las sanciones más que los bombardeos y la desmoralización intelectual más que la tortura .

Desde este punto de vista, es interesante seguir la evolución de estas propuestas en los propios documentos de los Estados Unidos en los que se definen los objetivos estratégicos del país y sus principales formas de acción. Así, por ejemplo, en el Manual de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales de EE. UU. Preparadas para Guerras No- Convencionales, publicado por el Pentágono en 2010, ya se afirma explícitamente que "el objetivo de EE. UU. en este tipo de guerra es explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y

psicológicas de las potencias hostiles, desarrollando y apoyando a fuerzas internas de resistencia para alcanzar los objetivos estratégicos de Estados Unidos ". Con el reconocimiento de que "en un futuro no muy lejano, las fuerzas de EE. UU. participarán predominantemente en operaciones de guerra irregulares" .

Esta orientación fue explicitada de manera aún más clara en el documento que definió por primera vez la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. del gobierno de Donald Trump, en diciembre de 2017. Allí se puede leer con todas sus letras que en el "golpe a la corrupción" debe tener un lugar central la desestabilización de los gobiernos de los países que sea "competidores" o "enemigos" de los Estados Unidos . Esta propuesta fue detallada en el nuevo documento sobre la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos, publicado en 2018, que señala que "una nueva modalidad de conflicto no armado ha tenido una presencia cada vez más intensa en el escenario internacional con el uso de prácticas económicas depredadoras, rebeliones sociales, ataques cibernéticos, noticias falsas, métodos anticorrupción " .

Es importante destacar que ninguno de estos documentos deja la menor duda de que todas estas nuevas formas de "guerra no convencional" deben ser utilizadas – prioritariamente - contra los Estados y las empresas que desafíen o amenacen los objetivos estratégicos de los EE. UU.

Ahora bien, en este punto de nuestra investigación, vale la pena hacer la pregunta fundamental: ¿cuándo fue, en la historia reciente, que Brasil entró en el radar de estas nuevas normas de seguridad y defensa de los EE. UU.? Y aquí no hay duda de que hay muchos hechos y decisiones que tomó Brasil, especialmente después de 2003, como su política exterior soberana, su liderazgo autónomo del proceso de integración sudamericano, o incluso de su participación en el bloque económico BRICS, liderado por China. Pero no hay duda de que el descubrimiento de reservas de petróleo del pre-sal, en 2006, fue el momento decisivo en que Brasil cambió su posición en la agenda geopolítica de los Estados Unidos. Basta leer el Blueprint for a Secure Energy Future, publicado en 2011 por el gobierno de Barack Obama, para ver que en ese momento Brasil ya estaba en una posición destacada en 3 de las 7 prioridades estratégicas de la política energética de los Estados Unidos: (i) como un fuente de experiencia para la producción de biocombustibles; (ii) como socio clave para la exploración y producción de petróleo en aguas profundas; (iii) como territorio estratégico para la prospección en el Atlántico Sur .

A partir de ese momento, no es difícil rastrear y conectar algunos acontecimientos, especialmente desde que el gobierno brasileño promulgó, en 2003, su nueva política para proteger a los productores nacionales de equipos de los antiguos proveedores extranjeros de Petrobras, como fue el caso, por ejemplo, de la compañía estadounidense Halliburton, la mayor empresa en el mundo de servicios de yacimientos petrolíferos, y uno de los proveedores internacionales líderes de sondas y plataformas marinas, que fue administrada por hasta la década de 2000 por el mismo Dick Cheney, quien se convertiría en el vicepresidente más poderoso de la historia de los Estados Unidos de 2001 a 2009. Odebrecht, OAS y otras grandes empresas brasileñas entran en esta historia a partir de 2003, exactamente en el lugar de estos importantes proveedores internacionales que perdieron su lugar en el mercado brasileño. Aquí debe recordarse el inicio de la compleja negociación entre Halliburton y Petrobras sobre la compra y entrega de las plataformas P 43 y P 48 de \$ 2,5 mil millones que comenzó en la administración de Dick Cheney y se extendió hasta 2003/4, con

la participación del Gerente de Servicio de Petrobras en ese momento, Pedro José Barusco, quien luego se convertiría en el primer delator conocido para la Operação Lava-Jato.

En este punto, por cierto, siempre es bueno recordar la famosa tesis de Fernand Braudel, el mayor historiador económico del siglo XX, de que "el capitalismo es el antimercado", es decir, es un sistema económico que acumula riqueza a través de la conquista y preservación de monopolios, valiéndose de cualquier medio a su alcance. O incluso, traducir el argumento de Braudel para niños: el capitalismo no es una organización ética ni religiosa, y no tiene ningún compromiso con ningún tipo de moral pública o privada que no sea la multiplicación de sus ganancias y la continua expansión de sus mercados. Y esto es lo que se puede ver, más que en cualquier otro lugar, en el mundo salvaje de la industria petrolera mundial, desde el comienzo de su explotación comercial, a partir del descubrimiento de su primer pozo por el "coronel" E.L. Drake en Pensilvania, en 1859.

Ahora bien, volviendo al eje central de nuestra investigación y de nuestro argumento, es bueno recordar que este mismo Dick Cheney, que venía del mundo del petróleo y desempeñó un papel decisivo como vicepresidente de George W. Bush, fue el que concibió e inició la llamada "guerra contra el terrorismo", con el consentimiento del Congreso estadounidense para iniciar nuevas guerras, incluso sin la aprobación parlamentaria; y, lo que es más importante para nuestros propósitos, consiguió hacer aprobar el derecho de acceso a todas las operaciones financieras del sistema bancario mundial, prácticamente sin restricciones, incluyendo el viejo secreto bancario suizo, y el sistema de pagos europeo, SWIFT.

Por lo tanto, no es absurdo pensar que fue por este camino que el Departamento de Justicia de los EE. UU. haya tenido acceso a las informaciones financieras que luego fueron transmitidas a las autoridades locales de los países que Estados Unidos se propuso desestabilizar con campañas selectivas "contra la corrupción". En el caso brasileño, al menos, fue después de estos acontecimientos que ocurrió el asalto y el robo de informaciones geológicas clasificadas y estratégicas de Petrobras en 2008, exactamente dos años después del descubrimiento de las reservas de petróleo pré-sal de Brasil en el mismo año en que Estados Unidos reactivó su IV Flota Naval de Monitoreo del Atlántico Sur. Y fue en el año siguiente, en 2009, que comenzó el intercambio entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Federal brasileña, para abordar los problemas lavado de dinero y "lucha contra la corrupción", en una reunión que dio como resultado la iniciativa de cooperación denominada Proyecto Puente, en la que participó el entonces juez Sérgio Moro.

Más tarde, en 2010, Chevron negoció discretamente, con uno de los candidatos a la elección presidencial brasileña, cambios en el marco regulatorio pre-sal, una "conspiración" que salió a la luz con las filtraciones de Wikileaks, que finalmente se convirtió en una Proyecto de ley presentado y aprobado por el Senado brasileño. Y tres años más tarde, en 2013, se supo que la presidencia de la República, los ministros de estado y los líderes de Petrobras estaban siendo objeto hace mucho tiempo de escucha telefónica y espionaje, como revelaron las acusaciones de Edward Snowden. El mismo año la embajadora de los Estados Unidos que acompañó el golpe de Estado de Paraguay contra el presidente Fernando Lugo fue trasladada a la embajada de Brasil. Y fue exactamente después de este cambio diplomático, en 2014, que comenzó la Operación Lava Jato, que se tomó la instigante decisión de investigar las recompensas pagadas a los directores de Petrobras, exactamente a partir de 2003, dejando de lado a los antiguos proveedores internacionales, en el preciso momento en que la compañía

estaba concluyendo las negociaciones con Halliburton sobre la entrega de las plataformas P 43 y P48.

Si todos estos datos estuvieran conectados correctamente, y nuestra hipótesis fuera creíble, no es sorprendente que después de cinco años del inicio de esta “Operação Lava-Jato” las filtraciones publicadas por el sitio web TheIntercept Brasil, informen sobre la parcialidad de los fiscales y del principal juez involucrado en esta operación y hayan provocado una reacción repentina y extemporánea a dos acusados principales de esta historia que prácticamente se escondieran, prácticamente, en los Estados Unidos. Probablemente en búsqueda de instrucciones e información que les permitieran salir del paso y hacer con sus nuevos acusadores lo que siempre habían hecho en el pasado, utilizando la información transmitida para destruir a sus oponentes políticos. Sin embargo, el pánico del ex juez y su falta de preparación para lidiar con la nueva situación lo hicieron actuar de manera apresurada, pidiendo una licencia ministerial y viajando por segunda vez a los Estados Unidos, haciendo con esto público su lugar en la cadena de mando de una operación que parece haber sido la única operación de intervención internacional exitosa, hasta ahora, por parte del dúo John Bolton y Mike Pompeo, los dos "terroristas suicidas" que dirigen la política exterior del gobierno de Donald Trump. Una operación custodiada por los norteamericanos y avalada por los militares brasileños.

Por lo tanto, si nuestra hipótesis estuviera correcta, no hay la menor posibilidad de que las personas involucradas en este escándalo sean denunciadas y juzgadas imparcialmente, porque todos los involucrados siempre han tenido pleno conocimiento y han aprobado las prácticas ilegales del ex juez y su "fiscal auxiliar", prácticas que fueron decisivas para la instalación del capitán Bolsonaro en la Presidencia de la República. Lo único que les molesta en este momento es el hecho de que su "conspiración" se haya hecho pública, y que todos han comprendido quién es el verdadero poder detrás de los llamados "Beatos de Curitiba".

\*Profesor titular del Programa de Postgrado en Economía Política Internacional (IE / UFRJ); Investigador en el Instituto de Estudios Estratégicos sobre Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP). \*\*Profesor de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo (FESPSP) y director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos del Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP).

28 de julio de 2019